

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

DECLARA

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, del Club Atlético Independiente, que pusieron en riesgo la vida y la integridad física de miles de bonaerenses.

Se responsabiliza de manera directa al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y al titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A. Pre.Vi.De.), Guillermo Cimadevilla, por su impericia absoluta, negligencia flagrante y total inoperancia, que permitieron que los incidentes ocurrieran.

Firmante: Gerardo Milman.

FUNDAMENTOS

1. Introducción: Un hecho indignante que exige rendición de cuentas

Señor Presidente:

El episodio ocurrido en el Estadio de Independiente es una vergüenza institucional y social. La violencia desatada no es un accidente: es la consecuencia directa de un Estado provincial que ha abandonado la obligación indelegable de proteger a los ciudadanos, delegando responsabilidades sin control, improvisando operativos y normalizando la incompetencia.

Como legislador que abraza las ideas de la libertad, no puedo ni debo callar ante un gobierno que vulnera la libertad de los bonaerenses al no garantizar su seguridad en espacios públicos. La libertad no es compatible con el miedo masivo: un ciudadano aterrorizado por la violencia en un estadio no ejerce libertad, sino que es rehen de la incompetencia y la negligencia política.

2. Responsabilidad política y administrativa de Alonso y Cimadevilla

El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, es responsable de toda la política de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Su tarea es planificar, coordinar y garantizar operativos efectivos. No hacerlo constituye abandono de la función pública y falta de idoneidad manifiesta.

Por su parte, Guillermo Cimadevilla, al frente de la A.Pre.Vi.De., tenía la misión específica de prevenir la violencia deportiva. La agencia que dirige es la primera línea de defensa contra incidentes que ponen en riesgo vidas humanas. El fracaso en este operativo no es un error técnico menor: es un crimen institucional de omisión deliberada, que convierte a los espectadores en víctimas directas de la ineficacia estatal.

Ambos funcionarios han demostrado que carecen de la capacidad mínima para proteger a la ciudadanía, y sus cargos se

vuelven incompatibles con cualquier noción de responsabilidad política o ética.

3. Un fracaso que trasciende la cancha

Lo ocurrido en Independiente no se limita al deporte: es un síntoma del abandono sistemático de la seguridad pública en la Provincia. La incapacidad de Alonso y Cimadevilla refleja la incompetencia estructural del gobierno de Axel Kicillof, que ha demostrado ser incapaz de garantizar la seguridad básica en cualquier ámbito.

Si el Estado no puede custodiar un estadio, ¿cómo pretende custodiar barrios, transporte público o instituciones críticas? Este hecho pone en evidencia la desconexión total entre las políticas declaradas y la realidad operativa, y revela que la gestión actual está más preocupada por la propaganda que por la seguridad efectiva.

4. Violencia previsible y previsión ignorada

La violencia en los estadios no es un fenómeno imprevisible. Existen antecedentes claros: la barra brava de Universidad de Chile ya había protagonizado incidentes similares, y A.Pre.Vi.De. conocía perfectamente los riesgos.

Ignorar estos antecedentes y permitir la ubicación de hinchas visitantes en sectores que facilitaban ataques es una negligencia criminal, que demuestra que los funcionarios no planifican, no prevén riesgos y, en definitiva, ponen en peligro la vida de miles por negligencia política.

5. Crítica al modelo de seguridad actual

La política de seguridad deportiva implementada por el gobierno de Kicillof ha fracasado sistemáticamente. La A.Pre.Vi.De., lejos de funcionar como un organismo profesional, ha mostrado deficiencia operativa, burocratismo extremo e incapacidad para actuar con eficacia, mientras que el Ministerio de Seguridad ha permitido que las fuerzas actúen con improvisación y sin liderazgo.

Este modelo genera un círculo vicioso: violencia descontrolada → fracaso institucional → impunidad → repetición de los hechos. La única salida razonable es remover a los responsables inmediatos y replantear integralmente la política de seguridad.

6. Impacto en la ciudadanía y en la libertad

Los ciudadanos que asisten a un espectáculo deportivo esperan ejercer su derecho a la libertad y el entretenimiento sin exponerse a la violencia. Lo sucedido demuestra que, bajo la gestión de Kicillof, los bonaerenses no gozan de libertad plena, sino que son rehenes de la incapacidad estatal.

La libertad exige seguridad y previsión: sin estas condiciones, hablar de derechos ciudadanos es un sinsentido. La renuncia de Alonso y Cimadevilla es una medida mínima de justicia y responsabilidad, y una condición necesaria para restaurar la confianza pública.

7. Comparación con estándares internacionales

En países como Inglaterra, Alemania o España, la violencia en el fútbol es abordada con protocolos de alta eficiencia, inteligencia preventiva y coordinación interinstitucional rigurosa. Allí, el incumplimiento de responsabilidades deriva automáticamente en sanciones administrativas y políticas.

El contraste con la Provincia de Buenos Aires es humillante: un estadio en el Conurbano queda en manos de la improvisación, la desidia y la negligencia, mientras que funcionarios que no cumplen su deber

permanecen en el cargo. Esta situación degrada la política y el Estado de derecho.

8. Falta de liderazgo y política de impunidad

El gobernador Kicillof ha mostrado, una vez más, que su gestión de la seguridad se basa en la improvisación, el clientelismo y la propaganda. No hay liderazgo real, no hay control de las fuerzas, y no hay sanciones ejemplares contra los responsables de la violencia.

Esta ausencia de liderazgo genera impunidad y perpetúa la violencia: los ciudadanos ven que el Estado abandona su rol protector, mientras los funcionarios irresponsables continúan en sus cargos. La renuncia inmediata de Alonso y Cimadevilla es, por lo tanto, imperativa y urgente.

9. Advertencia a la política y a la sociedad

Este Congreso no puede permanecer indiferente. La responsabilidad política debe ser clara y concreta: Alonso y Cimadevilla deben asumir las consecuencias de su fracaso. La tolerancia a la incompetencia es un atentado contra la libertad de los ciudadanos.

Si la política no sanciona a quienes incumplen gravemente sus deberes, el mensaje es devastador: la irresponsabilidad y la negligencia quedan libres de consecuencias, y la violencia seguirá replicándose.

Señor Presidente, lo ocurrido en el Estadio de Independiente es inaceptable, vergonzoso y profundamente grave. La ciudadanía merece que quienes ocupan cargos de responsabilidad sean idóneos, competentes y responsables.

Este proyecto de declaración establece con claridad la responsabilidad política de Javier Alonso y Guillermo Cimadevilla, y solicita su renuncia inmediata, como condición mínima para empezar a

reparar la credibilidad del Estado y garantizar la libertad de los bonaerenses.

La libertad exige seguridad. La seguridad exige responsabilidad. La responsabilidad exige rendición de cuentas. Quienes han demostrado ser incapaces de cumplir con su deber, no tienen derecho a permanecer en sus cargos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar esta declaración, enviando un mensaje inequívoco de que en la República Argentina la irresponsabilidad política y la inoperancia no serán toleradas.

Firmante: Gerardo Milman.